
XIMENA CUJABANTE VILLAMIL. Politóloga con énfasis en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Negociación y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Magíster en Asuntos Internacionales con énfasis en América Latina, de la Universidad Externado de Colombia, Candidata a Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia. Docente de planta del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo: ximena.cujabante@unimilitar.edu.co

Ximena Cujabante Villamil

CAPÍTULO VIII

El conflicto colombiano: una visión desde la sociología militar

RESUMEN

El objetivo de este capítulo es presentar algunas concepciones propias concernientes a cómo desarrollar el estudio y la investigación de la sociología militar en Colombia, a través de un análisis que trabaje las reglas propias del conflicto nacional y las connotaciones únicas y especiales sobre las que se desarrolla nuestra guerra. Primero se destaca la importancia fundamental de la sociología militar en el crecimiento y profesionalización de las Fuerzas Militares, para luego retomar el estudio de los componentes principales sobre los cuales debe orientarse el ejercicio de la sociología militar en Colombia.

PALABRAS CLAVE

Conflicto interno colombiano; educación militar; relaciones sociales entre militares y sociedad civil en Colombia; profesionalización de las Fuerzas Militares en Colombia; sociología militar en Colombia.

Introducción

El estudio del conflicto colombiano ha sido un tema de gran interés y exploración por parte de académicos, no solo colombianos sino extranjeros, que han intentado explicar y, en algunas ocasiones, hasta proponer soluciones al mismo. Sin embargo, el objetivo de este escrito es analizar el conflicto colombiano desde la óptica de la sociología militar⁶⁶, la cual, siendo una disciplina especializada y joven, empieza a jugar un papel importante a partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando surge en cabeza de connotados sociólogos.

Antes de comenzar a abordar el conflicto colombiano, es pertinente revisar los antecedentes de las Fuerzas Militares en Colombia, en razón a que este estudio se realizará desde la óptica de la sociología militar y toca uno de los grandes e importantes actores del conflicto que ha padecido la población colombiana por más de medio siglo.

Cabe anotar que la tradicional fuerza y eficacia de la élite civil política ha tenido un impacto histórico importante en el desarrollo y en la situación profesional de los militares. El control civil de los militares ha sido una norma desde los tempranos años de la Independencia. El cuerpo oficial del Ejército independentista, originario de Colombia, se construyó con los mismos aristócratas criollos que formaron el núcleo de las castas de militares de otros países latinoamericanos en el siglo XIX (Ruhl, 1980).

Creación de las Fuerzas Militares profesionales en Colombia

La creación de las Fuerzas Armadas profesionales comenzó con la reforma militar del presidente conservador Rafael Reyes (1904-1909) quien buscaba construir una armada nacional que ayudara a hacer cumplir la tregua entre los liberales y los conservadores y en este sentido, invitó a una misión de entrenadores alemanes y oficiales chilenos para ayudar en el proceso de profesionalización (Ruhl, 1980). En 1907, los chilenos ayudaron a encontrar el personal militar de la Escuela Militar de Cadetes y comenzaron un programa sistemático para el reclutamiento de oficiales (Ruhl, 1980).

⁶⁶ La sociología militar se concibe como la ciencia que se ocupa de estudiar a la sociedad militar en sus procesos de interacción internos y en los que esta desarrolle con los sistemas de su entorno (Gutiérrez Valdebenito, 1991).

Después de haber explorado someramente algunos de los antecedentes de las Fuerzas Militares colombianas, se abordará el conflicto colombiano, anotando que la violencia política ha sido una de las constantes en la historia de Colombia; y que esta característica del desarrollo sociopolítico del país llegó a su máximo punto durante la década de 1950, con el período conocido como La Violencia⁶⁷ (Mena, 1976).

Colombia ha vivido guerras y guerrillas casi desde su independencia. Las rivalidades y traiciones entre los héroes que participaron en ella se prolongaron en la guerra civil de 1840, donde tomaron forma los partidos Liberal y Conservador. Siguió cuarenta años de escaramuzas hasta que conservadores y liberales se enzarzaron en una guerra civil abierta entre 1899 y 1903. Dicho enfrentamiento finalizó con la Independencia de Panamá (Fernández, 1999).

Durante los primeros años del siglo XX, Colombia era un país controlado por dos partidos políticos civiles legítimos (Palacios, 2003). Para 1930, cambia un poco el tono político, militar, económico y social, al asumir el poder el liberalismo en 1930. El presidente Olaya⁶⁸ proclama “el Ejército es y debe ser el reflejo de la patria”, aunque paralelamente se veía el afloramiento en su interior de tesis ideológicas cuasi feudales y clasistas como “el reclutamiento militar debe hacerse preferiblemente entre campesinos –para oficiales entre la élite- ingenuos, frugales, robustos y no contaminados con las ideas subversivas” (Bermúdez, 2007).

En 1946, accedía al poder el conservatismo, tras la división del liberalismo y se empiezan a cimentar las bases de lo que se llamaría la violencia política. Autores como Bermúdez (2007), plantean que la semilla de la violencia cultivada antes por el liberalismo, creció exuberantemente en el régimen conservador e involucró a las Fuerzas Armadas, violencia que recibió un infortunado refuerzo con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948.

Según Daniel Pécaut (1997), al aproximarse el final de los años cuarenta, existía entre los actores dominantes unidad en lo económico, pero división en lo político. Las preocupaciones puestas en el centro del debate tenían que ver, sobre todo, con la táctica frente a las clases subordinadas en cuanto a actores polí-

67 El periodo conocido como “La Violencia” se sitúa de 1948-1958 (a pesar de que algunos historiadores lo sitúan desde 1946 hasta 1966), y se caracterizó por ser extremadamente violento a raíz de los enfrentamientos entre miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador (Guzmán *et al.*, 1962).

68 Enrique Alfredo Olaya Herrera fue presidente de Colombia del 7 de agosto de 1930 al 7 de agosto de 1934. Fue miembro del Partido Liberal. Le tocó afrontar el conflicto que surgió con el Perú, resuelto por la Sociedad de Naciones y por el Protocolo de Río de Janeiro en 1934. Su mayor interés se centró en dar solución a los problemas y reformas sociales, tales como la legislación obrera, asistencia pública, protección al obrero y al campesino (Rodríguez, 1979).

ticos. Siguiendo una tradición que venía desde la República Liberal, el presidente Mariano Ospina⁶⁹ nombró civiles en el Ministerio de Guerra. Sin embargo, el presidente comprometió rápidamente a los militares en tareas de orden público y en el ejercicio del poder a nivel municipal. Hacia finales de 1946, los alcaldes militares eran más de 200. La medida según Ospina, era saludable porque los militares constituían un magnífico frente para una transición pacífica en las burocracias municipales (Atehortúa y Vélez, 1994).

Entre 1946 y 1948, se cristalizaron distintas posiciones en el seno del Ejército con respecto a la política en general y al ejercicio del poder en particular, estas son algunas:

1. Pese a los dos años de ejercicio del poder municipal, subsistía una franja importante de oficiales que preferían distanciarse de la política. Temían que los compromisos progresivos con el gobierno de Ospina, deterioraran la imagen de las Fuerzas Militares en cuanto cuerpo armado imparcial y apolítico (Atehortúa y Vélez, 1994).
2. Sectores del alto mando pensaban diferente: la misión del Ejército se encontraba al lado de su jefe supremo como representante de un gobierno legítimo (Atehortúa y Vélez, 1994).
3. Entre ambos sectores existía un grupo de oficiales de más difícil ubicación, pero que, al observar el proceso seguido por la Policía, “rechazaban los intentos conservadores de hacer del ejército un instrumento de partido”. Algunos planteaban que el ejército se desprestigiaría si continuaba aplicando la justicia penal militar a la población civil (Atehortúa y Vélez, 1994).

Vale la pena resaltar, que esta época fue testigo de la sublevación militar y policial con apoyo del pueblo en varias guarniciones. De hecho, un año después del Bogotazo, se fraguaría un golpe de Estado por los tenientes de la Escuela Militar de Cadetes de la capital; simultáneamente, la Base Aérea de Apiay, en los Llanos Orientales, se levantó en armas contra el gobierno, este entorno sería la antesala

69 Luis Mariano Ospina Pérez fue presidente en el periodo entre 1946 y 1950. Fue miembro del Partido Conservador. Durante su mandato aumentó la llamada época de la violencia en Colombia entre liberales y conservadores y el 9 de abril de 1948 se produjo el asesinato de Gaitán. La delicada situación de orden público obligó a Ospina a convocar un gobierno de Unidad Nacional, que fracasó poco tiempo después (Reyes, 1989).

del movimiento militar del 13 de junio de 1953, liderado por el general Gustavo Rojas Pinilla (Bermúdez, 2007).

Desde la década del cincuenta, el régimen civil y las Fuerzas Armadas se erosionaban en todos los frentes. La clase en el poder veía que tras la violencia política comenzaba la revolución social. Hacia finales de 1952, esta se recrudece como antítesis, crecen los destacamentos guerrilleros que ya afectaban significativamente el equilibrio de fuerzas: se empezaba a sentir el cerco de las guerrillas del Alto Sumapaz sobre Bogotá y otras ciudades, plan estratégico que tenía como objetivo desmoronar el régimen. De hecho, las bajas en las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Policía política y las bandas paramilitares eran elevadas; el conflicto alcanzaba visos de guerra civil y de insurgencia general (Bermúdez, 1997).

Es en este escenario, que se comenzaba a vislumbrar el hecho de que las clases dominantes internas y externas, en su alianza tradicional, acordaron conjurar el peligro del derrumbamiento del régimen y por extensión del sistema, a través de llevar al poder al connotado oficial y comandante de las Fuerzas Militares, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Las Fuerzas Armadas, con el aval de la clase dominante, toman el poder para intentar superar no solo el conflicto interpartidista, sino el social. Estas dos variables políticas en un momento crucial, obligaron a los dirigentes de los dos partidos tradicionales a buscar por lo menos, provisionalmente, una alternativa de supervivencia, ante el temor de una inocultable avalancha popular, es decir, un conflicto entre clases, que es el que ha venido padeciendo el pueblo colombiano por espacio de más de medio siglo (Bermúdez, 2007).

El golpe militar lograba un temporal equilibrio institucional, ante el peligro de que la contienda partidista fuera desbordada por la lucha de clases. Terminaría así el enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales y sus élites y comenzaría una nueva tensión entre líderes emergentes revolucionarios y las masas, frente a las élites oligárquicas de los partidos (Bermúdez, 2007).

En los campos y ciudades se gozó de una relativa tranquilidad. Se dio una aparente paz, en medio de la gestación de una nueva fase de violencia de tipo social y político, hoy la insurgencia revolucionaria (Bermúdez, 2007).

El nuevo régimen adoptó un esquema populista nacionalista, criterio con el cual se intentaron desenvolver los gobiernos militares y civiles reformistas de América Latina de las décadas comprendidas desde el cincuenta hasta el setenta. Esto, se concretizó en la denominada tercera fuerza, primer intento por romper el bipartidismo oligárquico tradicional y para representar a los estratos sociales medios y a los marginados urbanos y rurales. Sin embargo, sin una base popular, el tercerismo intentó más bien constituirse en el árbitro de la lucha de clases (Bermúdez, 2007).

Alejo Vargas plantea que “el alzamiento y frustración se vio en el marco de dos procesos, el uno, el aislamiento en que se encontraba la Junta Militar de las Propias Fuerzas Armadas y el otro, la búsqueda de romper por parte de algunos sectores militares la dependencia ideológica de la clase política” (Vargas, 1995).

Instaurada la Junta Militar, su papel fundamental fue la transición para el regreso al poder de la clase dominante bipartidista, a través del Frente Nacional, el cual se legitimó por un plebiscito popular (Paredes y Díaz, 2007). No obstante, algunos autores plantean que el frente nacional en Colombia nace del temor de los partidos tradicionales por la insurgencia popular y la lucha de clases que ya se vislumbraba al iniciarse la violencia partidista de 1946 (Bermúdez, 1997).

Autores como Johnson (1962), plantean que el gobierno del general Rojas Pinilla⁷⁰ le dio estatus y sentido de importancia a las masas, aunque solo fuera porque su gobierno estaba haciendo grandes esfuerzos en su bienestar. Paradójicamente, el dictador militar estaba haciendo una considerable contribución a la democracia.

Entre 1949 y 1953, el Ejército, espontáneamente y sobre la marcha, intentó hacer un difícil tránsito para responder a las crecientes exigencias del orden público: de Fuerza Armada de defensa nacional trató de transformarse en Ejército de contrainsurgencia. Aún más: de Fuerza Armada formada en las concepciones y en las prácticas de la guerra regular y convencional, pretendió pasar a marchas forzadas, a las concepciones y las prácticas de la guerra irregular contrainsurgente. Este tránsito estuvo atravesado por múltiples dificultades asociadas a la configuración histórica institucional del Ejército.

Un aspecto problemático, pero muy expresivo de las dificultades padecidas por las Fuerzas Militares para adaptarse a las condiciones y tácticas de la guerra irregular, estuvo dado por sus formas de relación con la población civil. El Ejército se demoró por lo menos una década para asimilar lo más definitivo de la lucha de contrainsurgencia: la importancia de la población civil que rodea al enemigo (Atehortúa y Vélez, 1994).

Hasta entonces, el Ejército solo había buscado apoyo en la población partidaria del gobierno (lo que evidenciaba sus compromisos con una de las partes en conflicto) o había utilizado la táctica de tierra arrasada con la población civil liberal que apoyaba al movimiento guerrillero (Atehortúa y Vélez, 1994).

⁷⁰ El general Gustavo Rojas Pinilla fue presidente de Colombia de 1953 a 1957, tras un golpe de Estado al titular Laureano Gómez (Galvis y Donadio, 2002).

El Frente Nacional fue la fórmula de los partidos tradicionales para llenar el vacío de poder (Pérez, 1989). Bajo este acuerdo, los dos partidos acordaron dividirse las posiciones legislativas y burocráticas de igual forma, en una alternancia de la presidencia cada cuatro años en el período comprendido entre 1958 y 1974 (Ruhl, 1980).

Las limitaciones a participar en la dirección del Estado a quienes no pertenecían a los partidos tradicionales históricos, optaron por apelar a la lucha armada. Con evidencia, a la propia situación social interna, se sumaba la revolución cubana, que incidiría en Colombia de una u otra forma en el proceso insurgente.

Aparece el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) escindido del liberalismo oficial (Diago, 1995). Otro grupo juvenil participa de estos primeros pasos en 1960 hacia el nuevo ensayo de la vía armada revolucionaria en Colombia, como el Movimiento Obrero Estudiantil (MOEC) (Jaramillo, 2009); como contrapartida, los Estados Unidos idearían las Conferencias de Ejércitos Americanos (CEA), a fin de unificar y armar la acción contrainsurgente en América Latina. Será en el gobierno del presidente conservador Valencia, en el que aparecen numerosos núcleos guerrilleros y movimientos cívicos contestatarios. Como antítesis, se implanta la Acción Cívico Militar (Plan Lasso) con programas asistencialistas de mejoramientos económicos y sociales desarrollistas, tendientes a ganarse la simpatía de la población y así contrarrestar la violencia que se avecinaba (Bermúdez, 2007).

Paralelamente, se desarrollaron en el país otro tipo de acciones guerrilleras, producto de la provocación de las Fuerzas Armadas, hacia 1955, contra antiguas zonas guerrilleras y que hace posible el enfrentamiento entre estas y antiguos grupos alzados en armas, quienes conservaron cierta iniciativa en el combate y parte de sus armas y el principio de una ideología revolucionaria, aunque empleando aún tácticas de combate defensivas como la guerrilla móvil de auto-defensa estática (Bermúdez, 2007).

Por parte del Gobierno, surge el argumento de que estas zonas estaban penetradas por actividades soviéticas o del Partido Comunista, iniciándose una acción psicológica sin precedentes, con el fin de convencer a la opinión pública y a las Fuerzas Armadas sobre este hecho. Nacía hacia un nuevo mito contrainsurgente: las repúblicas independientes, categorías creadas por ideólogos civiles y militares ultra regresivos (Riochiquito, Pato, Guayabero, Marquetalia), donde la mayoría de la oficialidad y tropas aprendieron lecciones represivas contrainsurgentes. En estas concentraciones poblacionales, saturadas de incursiones masivas de tropas a partir de 1962, se ve por primera vez este ensayo de la autodefensa popular

en la renovada modalidad de la guerra de la pulga, que con relativo éxito había contenido el ataque masivo de las tropas y las hostilizaban considerablemente en su retirada (Bermúdez, 2007).

La década de los sesenta, es quizás el período que presenta más claramente una ruptura entre la adscripción partidista de los militares y sus nuevas concepciones ideológicas. Ello se da en medio de una profunda transformación interna de la institución, la que tendrá hondas repercusiones en el contexto social y político del país. En este sentido, se puede afirmar que el Frente Nacional tuvo efectos importantes en la institución militar. De un lado, cesa la confrontación entre los partidos, para lo cual se había utilizado repetidamente el Ejército como mecanismo de presión. El pacto y la coalición entre los partidos tradicionales rompía la usual función asumida por los militares en el marco de la confrontación bipartidista contra las guerrillas liberales en los años anteriores (Blair, 1993).

De otro lado, al irse acabando las adscripciones partidistas de los militares se consolidaba el proceso de transformación interna de la institución, el que suponía su configuración como cuerpo diferencial. Este tránsito se desarrolla en forma paralela al establecimiento de un nuevo tipo de relaciones con los demás Ejércitos latinoamericanos, donde las nuevas corrientes de pensamiento militar ya se empezaban a difundir (Blair, 1993).

Es de anotar que el Frente Nacional coincidió con el período de transformación de la violencia bipartidista en bandolerismo y de este en guerrillas revolucionarias, inspiradas en las tres corrientes revolucionarias del momento: la marxista-leninista, la marxista-leninista-maoísta y la de Liberación Nacional (Acosta, 2005). Autores como Pizarro (1996), plantean que la confrontación armada se originó en diferencias en el plano ideológico y no en cuestiones relacionadas con etnia, lengua o religión. La guerrilla en Colombia, a pesar de sus antecedentes en el período de la violencia, emerge bajo el impacto de la revolución cubana en los inicios de los años sesenta.

Mediante el fortalecimiento del aparato militar, en la década de los sesenta, el gobierno enfrenta no solo los problemas considerados de orden público, sino también los problemas sindicales y las movilizaciones estudiantiles. Los dos grandes problemas de orden público en ese período fueron el bandolerismo, rezago de la violencia partidista y la guerrilla revolucionaria. En este contexto, inicialmente los militares combinaron la acción cívico militar, implementada a partir de 1962, con un tratamiento militar de combate contra el movimiento guerrillero, que no se diferenciaba del dado en años anteriores al bandolerismo. La acción cívico militar estaba dirigida fundamentalmente a la construcción de

obras de infraestructura como escuelas, carreteras y puestos de salud, así como a la prestación de servicios básicos tales como consultas médicas y odontológicas en las zonas marginadas del país (Blair, 1993).

A través de una labor social y psicológica, se pretendía ganar a la población que hasta constituía la base social de apoyo al movimiento guerrillero, comportamiento que manifestaba una nueva comprensión de su propio papel tras las sucesivas derrotas durante los años cincuenta. Aunque se trataba de una labor desarrollada por las Fuerzas Armadas, ella fue apoyada por algunos sectores públicos y por diferentes sectores de opinión. No obstante, si bien la clase política nacional y los gremios empresariales dieron su apoyo a la acción cívico militar, a nivel de los poderes locales hubo dificultades para su implementación, en una muestra clara de la fragmentación del poder en el país. Paradójicamente, sus objeciones no provenían de un análisis sobre la estrategia para enfrentar a la guerrilla sino del hecho de que, según algunos caciques regionales, el Ejército con sus obras “les quitaba el pueblo” (Blair, 1993).

Es de anotar que, durante los últimos años del Frente Nacional, la confrontación principal de los militares se dirigía hacia dos organizaciones guerrilleras, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), (Ruhl, 1980). Esta última agrupación guerrillera comenzaría por activar, con el tiempo, frentes tácticos que cubrirían estratégicamente el territorio nacional, para insertarse profundamente en los núcleos campesinos; al teatro de guerra irregular se irán sumando algunas organizaciones armadas como el ELN, EPL, el M-19 y otras (Bermúdez, 2007).

Es a las Fuerzas Armadas a las que correspondería, a partir de ese entonces hasta hoy, enfrentarse con un elemento diferente del guerrillero liberal; estarán ante un guerrillero social; paralelamente, se verá a las tropas regulares convertirse en unidades de combate irregular contrainsurgente (Bermúdez, 2007).

Autores como Bermúdez (2007), plantean que el conflicto entre clases que comienza a tener impulso, se vería reflejado en una propia sociología bélica colombiana y en esta, el rol militar desempeñado en la disfunción, esencialmente, en el fenómeno de la migración impuesta por los autores del conflicto y que se proyecta en la actualidad.

Los últimos años de la década del setenta marcaron la renovación de la actividad de las guerrillas, tras años de crisis internas y apatía de la lucha armada. Siguiendo al M-19, las guerrillas intensificaron sus operaciones militares y su propaganda. Frente al engrandecimiento del M-19, especialmente entre las clases medias e intelectuales, las guerrillas entablaron una especie de competencia,

donde cada uno aspiraba a ser la legítima depositaria de la oposición armada en un sistema político tradicionalmente marcado por el bipartidismo entre conservadores y liberales (Lair, 2000b).

Daniel Pecaut (1997), introduce un nuevo elemento en este período y es el surgimiento de una nueva dimensión de la violencia, aquella asociada al desarrollo de la economía de la droga. Este desarrollo comenzó a principios de los años 70, con el cultivo de la marihuana en los departamentos de la Costa Atlántica. Durante la segunda mitad de los 70 y, más aún, a comienzos de los ochenta, el conflicto tomó una amplitud considerable con la expansión de las actividades ligadas a la coca.

La década de los ochenta para algunos autores como Elsa Blair (1993), ha sido quizá la más violenta, ya que múltiples actores y en muy diversos escenarios van a envolver al país en un remolino de violencias, cuya magnitud e intensidad no se veían desde la época de la llamada violencia.

El conflicto armado va a estar presente durante toda la década y se convertirá en el escenario privilegiado de confrontación entre una variada gama de actores: guerrillas, militares, paramilitares, narcotraficantes, delincuencia común, autodefensas, entre otros, cruzando diferentes espacios que cada vez involucran a más sectores de la población. Dicha situación hará que el orden público adquiera un carácter estratégico y que en consecuencia los gobiernos de este período lo asuman como un problema prioritario. Dado el tradicional manejo del orden público por parte de las Fuerzas Armadas, en esta década, estas tomarán una relevancia sin precedentes y se constituirán en un actor de primer orden en la vida política nacional (Blair, 1993).

Marco Palacios (2000), plantea que en los años ochenta, cinco factores contribuyeron al despegue hacia una guerra civil de baja intensidad:

1. La dinámica colonizadora;
2. Los procesos de paz iniciados en 1982;
3. La globalización y la irrupción masiva del narcotráfico en el mundo rural y político;
4. la descentralización fiscal que, además de incrementar los recursos presupuestales de los municipios, amplía los márgenes de autonomía en su manejo;
5. El fin de la Guerra Fría con el colapso de la Unión Soviética.

Para la década de los noventa, la insurgencia logró variar su condición de guerrilla rural con influencia exclusiva en zonas periféricas, convirtiéndose en una organización que pretendía consolidar su influencia en amplias zonas del territorio nacional, aplicando para ello una estrategia que articulaba circunstancias económicas, políticas y militares (Echandía, 2000).

Hacia comienzos de la década de los noventa, la actividad armada de la guerrilla se recrudece, luego de la realización, en septiembre en 1990, de la Quinta Cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en la cual se acordó la ejecución de acciones contra las Fuerzas Armadas y la infraestructura económica del país (Echandía, 2000).

De hecho, las presiones de los grupos armados encaminadas a incrementar su influencia en la esfera local, se manifestaron en un creciente número de asesinatos, secuestros y amenazas que recaían en dirigentes políticos, funcionarios del Estado y civiles en general (Echandía, 2001).

La década de los noventa, comienza con el gobierno de César Gaviria⁷¹, el cual trajo modificaciones importantes en el país. Su gestión se inició llevando a feliz término procesos de paz con varios grupos guerrilleros y acumulando éxitos significativos en la política diseñada para enfrentar el narcotráfico. Esto, a la sombra de la realización de la Asamblea Nacional Constituyente que permitió la participación de sectores tradicionalmente marginados de la vida política, la promulgación de una nueva Carta Política y la revocatoria del Congreso actuante.

Con respecto a las Fuerzas Militares, Gaviria inicia su gobierno con políticas bastante claras, apuntando a un control civil del orden público por primera vez en el país. Los cambios realizados, en lo que se refiere a los asuntos militares, fueron bien significativos. Las modificaciones empezaron a expresarse en la creación de una Consejería de Seguridad Nacional que tenía como función coordinar la política integral contra la violencia y el diseño de políticas a mediano plazo, que implicaran la acción de todas las instituciones del Estado en programas concretos contra la violencia (Blair, 1993).

La coyuntura internacional en los noventa planteaba la necesidad de un cambio en el rol jugado por las Fuerzas Armadas latinoamericanas (Kruijt y Koonings, 2002). En este sentido, se dieron pasos conducentes a la elaboración de una doctrina militar. Los nuevos desafíos a la seguridad ya no eran asociados a la defensa en términos castrenses, sino que exigían reformulaciones y nuevas

71 César Gaviria fue presidente de Colombia en el periodo 1990-1994, miembro del Partido Liberal. Durante la administración Gaviria, se promovió el proceso de apertura económica, se creó el Ministerio de Comercio Exterior, se redujeron los aranceles y las barreras al comercio, se abrieron las puertas a la inversión extranjera, se impulsó la primera zona libre de comercio en el continente americano, Colombia lideró el proceso de integración regional y subregional, se fortaleció el papel del sector privado y se emprendieron planes de modernización de la infraestructura de puertos, vías y comunicaciones. Entre los problemas que el presidente Gaviria tuvo que enfrentar estuvo el recrudecimiento del narcoterrorismo de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los demás integrantes del grupo "Los Extraditables", que culminó con la muerte de Rodríguez Gacha en enfrentamientos con el Ejército y el sometimiento a la justicia de Escobar junto con otros miembros del Cartel de Medellín (Uribe y Mejía, 2011).

concepciones frente a la seguridad, lo cual requería de un replanteamiento del rol jugado por las Fuerzas Armadas (Blair, 1993).

A la quiebra de los referentes de seguridad, que habían sido implantados durante las últimas décadas, viene a sumarse el debilitamiento de los movimientos guerrilleros. Mientras unos se reincorporaban a la vida civil, otros caían en el aislamiento político al insistir en una confrontación armada que los estaba marginando del escenario político. Esta marginalidad contribuye a la quiebra del enemigo interno en los militares. De ahí que el replanteamiento de su función supone su regreso a los cuarteles y su retorno a funciones tradicionales de defensa de las fronteras y de la soberanía nacional (Blair, 1993).

Es de anotar que, en la década de los noventa, la expansión territorial de los protagonistas del conflicto interno se orientaba hacia la conquista de zonas con elevado valor estratégico (Collier, 2001). La lucha en la que se entrelazan los paramilitares y los grupos guerrilleros, más allá de suscitarse por desacuerdos ideológicos, resulta de la disputa por el control de zonas con un alto potencial para ambas fuerzas y donde el apoyo de la población civil se conseguía por la vía de la violencia y la intimidación.

Las organizaciones actuaban a nivel local como redes de poder que manejaban instrumentos de fuerza y eran capaces de imponer control sobre la población a través de la intimidación, remplazando los lazos de solidaridad colectiva por la desconfianza mutua. Con el fin de imponer sus reglas y homogenizar el territorio según sus intereses, los grupos armados le imprimen una dinámica local amigo-enemigo al conflicto (Echandía, 2001).

Por eso, en la década de los noventa se evidenció cómo los paramilitares se disputaban el control de varias localidades con presencia guerrillera, acrecentándose la bipolarización del conflicto en el que el Ejército regular colombiano ejerció un papel no muy activo, ya que este frecuentemente se encontraba acantonado en sus campamentos a falta de una estrategia política y militar claramente definida y de dominio de territorio (Sánchez *et al.*, 2003). Al mismo tiempo, el Ejército constituía el principal objetivo militar para la subversión.

En este contexto, bajo la presidencia de Andrés Pastrana,⁷² se propuso una reforma militar enfocada hacia la creación de unidades flexibles (como la Fuerza de Despliegue Rápido) y en el uso de modernas tecnologías aéreas provenientes de Estados Unidos, lo que logró la multiplicación de acciones contra la guerrilla, las cuales les ocasionaron importantes pérdidas (Blair, 2000).

⁷² Andrés Pastrana Arango fue presidente de Colombia en el periodo entre 1998 y 2002. Fue miembro del Partido Conservador (Ahumada, 2002).

Según Lair (2000a), al comparar el conflicto armado colombiano en la década de los noventa, con otros conflictos internos del mundo, se encuentra que una de las principales particularidades desde el punto de vista militar radica en que las poblaciones son el blanco y la inversión de la mayoría de las acciones armadas. Se asistía a una guerra por poblaciones interpuestas en la cual las confrontaciones directas eran la excepción. De esta forma, la emergencia del fenómeno paramilitar y las acciones emprendidas contra el Ejército por la guerrilla, sobre todo a partir del primer lustro de los años noventa, llevó a intensificar los combates directos, aun cuando escaseaban las grandes y costosas campañas militares.

A lo largo de las décadas ochenta y noventa, la presión y las coacciones armadas contra los civiles se intensificaron (Restrepo *et al.*, 2006). No solo la guerra invadió varios espacios civiles, sino también las relaciones sociales en lo cotidiano y los espacios mentales de las personas, las cuales vivían en un estado de guerra y miedo permanentes (Waldmann, 2007).

Por otro lado, cabe resaltar que la década de los noventa fue el escenario donde las Fuerzas Militares sufrieron una serie de derrotas que produjeron una grave crisis en la confianza y credibilidad de las Fuerzas Armadas y, particularmente, en la moral de la tropa. A raíz de la crisis desatada por la escalada militar de las Farc, se dio inicio a una serie de reformas profundas que tocaron casi todos los aspectos de las Fuerzas Militares (Torres del Río, 2008). Algunos de estos cambios reformaron componentes operacionales, de comando y control y, en general, aspectos estratégicos de las Fuerzas Militares, mientras que otros transformaron asuntos referentes a la normatividad y a las estructuras orgánicas (Rangel, 1999).

La consecuencia más importante del proceso de transformación es que se logró contener la ofensiva de las Farc, lo cual se hizo evidente en operaciones tales como Puerto Rico y Puerto Lleras en el departamento del Meta⁷³ en 1999 (Rangel, 2003).

No obstante, esta transformación, vale la pena anotar que el recrudescimiento de las confrontaciones armadas, el incremento de muertes y secuestros, los reveses del Ejército y los costos económicos y sociales de la violencia pusieron el tema de la paz sobre el tapete. El ambiente de búsqueda de una paz política también se nutría, paradójicamente, de las acciones de los grupos paramilitares (Romero, 2007). Sin embargo, dicha crisis culminó con la propuesta presidencial de un gran acuerdo nacional, que las diferentes fuerzas políticas presentes en el Congreso aceptaron (Leal, 2006).

⁷³ El departamento del Meta es uno de los 32 departamentos de Colombia y se localiza en la región central del país y su territorio se extiende desde el piedemonte llanero hasta los llanos orientales. Su capital es Villavicencio (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2009).

En este orden de ideas, las Farc pidieron, a comienzos de 1998, desmilitarizar los municipios de la Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá,⁷⁴ como requisito para iniciar conversaciones de paz, lo cual fue aceptado por el presidente Andrés Pastrana. No obstante, la dinámica creada por el proceso de paz, la agresiva respuesta de las Farc y el aumento del secuestro llevaron a que en 1999 se generaran movilizaciones sociales en contra del secuestro y de la violencia en general. Ante esta situación, el presidente de la República planteó una serie de medidas necesarias para lograr una reestructuración militar que le devolviera la eficacia a las instituciones castrenses.

Los primeros cambios militares se orientaron al control jerárquico establecido, al ajuste a procedimientos de rutina y de unidades operativas. Mediante la coordinación del Ejército y la Fuerza Aérea y gracias a la cooperación de militares brasileños de una base fronteriza, se pudo desalojar a la guerrilla luego de cruentos combates. Es de resaltar que las acciones militares no fueron solamente reacciones ante las arremetidas de la subversión, sino que también se adelantaron operativos ofensivos (Leal, 2006).

Según Rangel (2003), los cambios en la tecnología aplicada a la conducción de la guerra en Colombia, estuvieron acompañados por una serie de reformas institucionales que los potenciaron y complementaron. De estos, cabe resaltar el proceso de profesionalización de las Fuerzas Militares, así como la reforma a los estatutos de carrera, de evaluación y de ascenso del personal militar a través de la expedición de decretos ley, en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno de Andrés Pastrana por el Congreso de la República. Adicionalmente, se introdujeron reformas a las estructuras del Comando General de las Fuerzas Militares y de cada una de las Fuerzas.

A través de la Diplomacia por la paz, el presidente Pastrana inició una gestión no solo con el fin de adquirir recursos destinados al fortalecimiento de las instituciones del Estado en su lucha por erradicar la violencia y los factores que de alguna medida la generaban, sino también de mostrarle al mundo la realidad del conflicto colombiano y la de sus actores (Tokatlian, 1999). Esta estrategia comprometió a la comunidad internacional vinculada directamente en la lucha contra el narcotráfico. Con esto, Andrés Pastrana iniciaba un proceso de fortalecimiento del Estado dentro del cual se contemplaba la modernización y profesionalización de sus Fuerzas Armadas (Acosta, 2005).

⁷⁴ El departamento del Caquetá es uno de los 32 departamentos de Colombia y se encuentra localizado en el suroriente del país. La región del Caquetá comienza en el piedemonte andino y termina en los escarpes de Aracua en plena selva amazónica. Su capital es Florencia (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2009).

Uno de los cambios institucionales más importantes que se implementaron en el período 1998-2003 fue la paulatina pero constante profesionalización de las tropas. Tanto el Ejército como la infantería de Marina avanzaron en este proceso. Las Fuerzas Militares adelantaron un proceso de profesionalización de sus soldados e infantes de marina, remplazando los llamados bachilleres por soldados profesionales, aumentándose en 30000 estos últimos (Rangel, 2003).

En este sentido, los resultados no tardaron en dejarse ver. El Estado, con sus Fuerzas Militares, tuvo un cambio positivo y su actitud dejó de ser defensiva a una totalmente ofensiva. Con acciones de un valor estratégico importante lograron recuperar la credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional que la cuestionaba por su poca efectividad frente al enemigo y por un elevado índice de acusaciones sobre presuntos casos de violaciones a los derechos humanos (Acosta, 2005).

Por otro lado, cabe anotar que el tema de la seguridad se integró en la conciencia ciudadana hasta convertirse en el problema más sentido de la opinión pública durante el último año del gobierno Pastrana. Así, se daba la bienvenida al nuevo milenio y comenzaba su presidencia Álvaro Uribe Vélez,⁷⁵ con la política de seguridad democrática.

Según Leal (2006), a mediados de 2003 se conoció el perfil definitivo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, el cual constaba de cinco partes: en la primera parte se enunciaban propósitos democráticos que supuestamente eran la esencia de esa política, como son los derechos humanos, la cooperación y solidaridad, la eficiencia y austeridad, la transparencia y juridicidad, la multilateralidad y corresponsabilidad, la acción coordinada del Estado y una mención final sobre la opción de negociación.

En la segunda parte se formulan las amenazas que son un riesgo para la nación, las instituciones democráticas y la vida de los colombianos. Estas eran seis: 1. Terrorismo; 2. Negocio de drogas ilícitas; 3. Finanzas ilícitas; 4. Tráfico de armas, municiones y explosivos; 5. Secuestro y extorsión y 6. Homicidio.

En la tercera parte, se señalan 5 objetivos estratégicos: 1. Consolidación del control estatal del territorio; 2. Protección de la población; 3. Eliminación del comercio de drogas ilícitas; 4. Proteger a los ciudadanos y la infraestructura de la nación; 5. Cooperar para la seguridad de todos y 6. Comunicar las políticas y acciones del Estado. La última parte menciona en forma breve el tema de financiación y evaluación. El documento sobre la política de seguridad fue un esfuerzo

⁷⁵ Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia durante los periodos 2002-2006 y 2006-2010. (Sánchez y Rodríguez, 2007)

importante de integración de responsabilidades en los aspectos de la seguridad, pero, ante todo, de asumir la responsabilidad civil en la dirección política de la seguridad y los asuntos militares (Ricci, 2011).

En este orden de ideas, la aplicación militar de esta política de seguridad constituyó un plan de guerra. Sin embargo, en el contexto oficial de no aceptar la existencia del conflicto armado interno se le llamó Plan Patriota, el cual fue complementario al Plan Colombia⁷⁶ contra las drogas, iniciado en 2001 con apoyo de Estados Unidos (Rojas, 2003). El Plan Patriota se implementó sobre la marcha, a medida que evolucionó la situación frente a las Farc, el eje de sus objetivos. Por eso, terminó por concentrarse en el sur del país en la retaguardia estratégica de esta guerrilla (Leal, 2006).

A partir de la primera década del nuevo milenio, dentro del contexto general y sin desconocer algunos logros destacados como la continuidad en la disminución de la tasa de homicidios, los duros golpes a las jerarquías de la guerrilla y el fortalecimiento evidente de las Fuerzas Militares, muestra que la percepción en la opinión pública ha sido fundamental para la seguridad, pese a que aún persiste la presencia del conflicto armado.

El panorama actual es alentador. El presidente Juan Manuel Santos⁷⁷ ha reconocido el éxito de las Fuerzas Militares y la creciente presencia del Estado en todo el territorio nacional, aunado a una oportunidad de terminar definitivamente el conflicto armado a través de un proceso de paz, que ya ha iniciado con los acercamientos entre las partes y la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto (El País, 2012). La sociedad colombiana está a la expectativa y mantiene la esperanza de que la anhelada paz sea por fin una realidad palpable (Fisas, 2010).

Conclusión

A lo largo de este capítulo se abordó el conflicto interno colombiano desde una aproximación de la sociología militar. Se explora la incidencia de los hechos tanto a nivel nacional como regional e internacional en la evolución de dicho conflicto y las implicaciones en la vida no solo de los militares sino de la sociedad civil.

⁷⁶ El Plan Colombia fue un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Fue impulsado por la administración del presidente colombiano Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton, con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica y crear una estrategia antinarcofónica (Palacios, 2007).

⁷⁷ Juan Manuel Santos fue presidente de Colombia en el periodo 2010- 2014 y fue reelegido para el periodo 2014-2018. Actualmente lidera Conversaciones de Paz con la guerrilla Farc-EP en La Habana, Cuba (Beittel, 2013).

Son escasos los estudios serios que delimitan el área de conocimiento sobre la cual deba transcurrir el progreso de esta ciencia a nivel local, evidenciando con ello una insuficiencia epistemológica que pueda arrojar resultados certeros, los cuales nos acerquen más a la realidad del conflicto.

La importancia de trabajar metódicamente sobre la base de unos fundamentos propios del conflicto colombiano proporciona un crecimiento objetivo y real al campo científico de la sociología militar en Colombia, fijándonos unos límites de expansión nacional para el crecimiento de esta rama científica, materializados a partir de la educación militar y la educación superior.

Evidentemente, el estudio de la sociología militar, ha pasado a ser indispensable en los ejércitos más importantes del mundo. Hacer frente a las nuevas responsabilidades militares dadas en el contexto contemporáneo, requiere el uso de la investigación y comprobación. Este orden nos permite calcular y medir las respuestas que se obtienen en el estudio de un grupo de personas en un determinado campo de la vida, reflejando el poder de la influencia que los grupos pueden introducir en los comportamientos individuales.

Como cuerpo teórico, las ciencias sociales evolucionan y distinguen variables que intentan responder a las problemáticas de la vida en sociedad, ayudando a la explicación objetiva que surge de este movimiento. En el campo de las relaciones civiles militares, se ha mejorado en el entendimiento histórico de las intervenciones militares en pro de la democracia, la soberanía y la defensa nacional (Gutiérrez Valdebenito, 2002, p. 98).

En su andar, la naturaleza de la modernización es dirigir y gobernar razonablemente sobre las problemáticas que aquejan la sociedad, adaptando múltiples variables, según las condiciones de los pueblos, así lo exijan (Apter, 1972, p. 63).

Es por esta y muchas otras razones que el conocimiento de la sociología militar es fundamental en el crecimiento y profesionalización de los ejércitos. Como campo científico de las ciencias sociales, brinda la oportunidad de adaptar y transformar las posibilidades de los estamentos militares, de acuerdo con el tipo de conflicto que se esté librando en medio de las armas (Borrero, 1990). Innegablemente, el pasado más reciente está marcado por una serie de hechos sociales que transmiten a la comunidad la sensación desasosegante de riesgo para la libertad y la vida. Muchos son los aportes que cada teoría puede dejar para el fortalecimiento de la institución militar colombiana, es responsabilidad de la sociología militar profundizar en el análisis de los múltiples sistemas de conocimientos que componen la realidad de este campo, materializarlos objetivamente como estudios serios y responsables que pueden desarrollarse a través de las academias militares del país.

Bibliografía

- Acosta, L. (2005). *Conflicto colombiano. Historia y contexto*. Bogotá: Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares.
- Ahumada, C. (2002). *Cuatro años a bordo de sí mismo: la herencia económica, social y política del gobierno de Andrés Pastrana*. Bogotá: El Ancora Editores.
- Apter, D. (1972). *La política de la modernización*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Atehortua, A. y Vélez, H. (1994). *Estado y Fuerzas Armadas en Colombia*. Colombia: TM Editores.
- Bermúdez, G. (1997). *Pronunciamientos, conspiraciones y golpes de Estado en Colombia*. Bogotá: Ediciones Expresión.
- Bermúdez, G. (2007). *Sociología de la guerra. Dos mundos en conflicto*. Bogotá: Ediciones Expresión.
- Beittel, J. S. (2013). Peace talks in Colombia. *Current Politics and Economics of South and Central America*, 6(2), 179.
- Blair, E. (1993). *Las Fuerzas Armadas, una mirada civil*. Colombia: CINEP.
- Collier, P. (2001). Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas. *Revista El Malpensante*, (30), 28-53.
- Borrero, A. (1990). Militares, Política y Sociedad. *Revista Colombiana de Sociología*, 1(1), 77-88.
- Diago, C. A. (1995). El origen del MRL (1957-1960) y su conversión en disidencia radical del liberalismo colombiano. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, (22), 95-121.
- Echandía, C. (2000). El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos. *Revista Colombia Internacional*, 49-50, 117-134.
- Echandía, C. (2001). La violencia en el conflicto armado durante los años noventa. *Revista: Orden Público*, 5, 229-246. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- El País. (2012, septiembre 4). *Estamos ante una oportunidad real de terminar el conflicto armado interno*. En: Diario El País.
- Fernández, J. (1999). Colombia ¿hacia el fin de cien años de guerra? *Revista Política Exterior*, 13(69), 87-98.
- Fisas, V. (2010). El proceso de paz en Colombia. *Quaderns de construcció de Pau*, 17, 1-17.
- Galvis, S. y Donadio, A. (2002). *El jefe supremo: Rojas Pinilla en la violencia y en el poder*. Bogotá: Hombre Nuevo Editores.
- Gutiérrez, V. O. (1991). Las ciencias sociales y las Fuerzas Armadas. *Revista de Marina*, 4.
- Gutiérrez Valdebenito, O. (2002). *Sociología militar. La profesión militar en la sociedad democrática*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.
- Guzmán, G., Fals, O., y Umaña, E. (1962). *La violencia en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2009). *Nombres geográficos de Colombia. Departamentos y ciudades capitales*. Bogotá: IGAC.
- Jaramillo, J. D. (2009). "Si me asesinan, vengadme". El gaitanismo en el imaginario de la nueva izquierda colombiana: el caso del MOEC 7 de enero. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 36(2), 121-145.
- Johnson, J. (1962). *The role of the military in underdeveloped countries*. United States: Princeton University Press.
- Kruijt, D., y Koonings, K. (2002). Fuerzas Armadas y política en América Latina: perspectivas futuras. *Iberoamericana* 2(8), 7-22.
- Lair, E. (2000a). Colombia: una guerra contra los civiles. *Revista Colombia Internacional*, 49(50), 135-147.
- Lair, E. (2000b). Colombia en la espiral de la guerra. *Revista FASOC*, 15(3), 30-37.
- Leal, F. (2006). *La inseguridad de la seguridad. Colombia 1958-2005*. Colombia: Editorial Planeta.
- Mena, L. (1976). Cien años de soledad: novela de la violencia. *Revista Hispanoamericana*, 5(13), 3.
- Palacios, M. (2000). Colombia: ni estado de guerra, ni estado de paz; Estado en proceso de paz. *Foro Internacional*, 40(1), 15-40.

- Palacios, M. (2003). *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*. Bogotá: Editorial Norma.
- Palacios, M. (2007). *Plan Colombia: ¿Antidrogas o contrainsurgencia?* Serie Cátedra Corona. Universidad de los Andes, Facultad de Administración. 12, 36.
- Paredes, D. y Díaz, N. (2007). Los orígenes del Frente Nacional en Colombia. Presente y Pasado. *Revista de Historia*, 12(23), 179-190.
- Pecaut, D. (1997). Pasado, presente y futuro de la violencia en Colombia. *Revista Desarrollo Económico*, 36(144), 890-931.
- Pérez, H. E. (1989). *Proceso del bipartidismo colombiano y Frente Nacional*. Bogotá: Centro Editorial, Universidad Nacional de Colombia.
- Pizarro, E. (1996). *Insurgencia sin revolución: la guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada*. Bogotá: TM Editores-Iepri.
- Rangel, A. (1999). Colombia la guerra irregular de fin de siglo. *América Latina Hoy*, 23, 29-36.
- Rangel, A. (2003). *Fuerzas Militares para la guerra. La agenda pendiente de la reforma militar*. Colombia: Fundación Seguridad y Democracia.
- Restrepo, J. A. Spagat, M. Vargas, J. F. (2006). El conflicto en Colombia ¿Quién hizo qué a quién? Un enfoque cuantitativo. En: *Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia*. Gutiérrez, F. (ed.). Instituto de Estudios políticos y relaciones internacionales (IEPRI). (pp. 505-543). Bogotá: Editorial Norma.
- Ricci, F. J. (2011). *Colombian Army Transformation and the Inflection Point of the Terrorist Groups*. Carlisle Barracks, Pennsylvania: US Army War College.
- Romero, M. (2007). *Nuevas guerras, paramilitares e ilegalidad: una trampa difícil de superar. Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Rojas, J. (2003). Plan Colombia, conflicto armado y migraciones forzadas. *Revista Aportes Andinos. Globalización, migración y derechos humanos*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 7: 11-21. Recuperado de: <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/625/1/RAA-07-Rojas-Plan%20Colombia%2c%20conflicto%20armado%20y%20migraciones.pdf>
- Reyes, C. (1989). *El gobierno de Mariano Ospina Pérez: 1946-1950. Nueva historia de Colombia 2*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Rodríguez, G. H. (1979). *Olaya Herrera: Político, estadista y caudillo*. (vol. 2). Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Ruhl, M. (1980). *Colombia: armed forces and society*. New York: Maxwell School of Citizenship and Public Affairs Syracuse University.
- Sánchez, F., Díaz, A. M., y Formisano, M. (2003). *Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial*. Bogotá: Universidad de los Andes. CEDE.
- Sánchez, D. y Rodríguez, F. A. (2007). *Seguridad, democracia y seguridad democrática*. Bogotá: Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.
- Tokatlian, J. (1999). Colombia en guerra: Las diplomacias por la paz. *Desarrollo Económico*, 39(155), 339-360.
- Torres del Río, C. (2008). Conflicto interno y Fuerzas Armadas colombianas: 1982-2002. En: *De milicias reales a militares contrainsurgentes: la institución militar en Colombia del siglo XVIII al XXI*. Torres del Río, C. y Rodríguez, S. M. (Eds.), (pp. 339-361). Bogotá: Editorial Javeriana.
- Uribe, A. G. y Mejía, D. (2011). *Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Vargas, A. (1995). *Política y armas al inicio del frente nacional*. Colombia: Ediciones Universidad Nacional de Colombia.
- Waldmann, P. (2007). *Guerra civil, terrorismo y anomia social: el caso colombiano en un contexto globalizado*. Bogotá: Editorial Norma.